



La Guardia Civil da escolta a los concejales de Mazarrón ante los seguidores de Valera.

JUAN LEAL



Aznar saluda a dos trabajadoras de Fuente Alamo durante su visita a la Región.

JOSE M. RODRIGUEZ

Valera armó el belén

Valcárcel pasó los peores momentos con las acusaciones del ex alcalde de Mazarrón

J. MOLLEJO
MURCIA

El año se inició con los ecos y la ratificación del nuevo sistema de financiación autonómica para los próximos cuatro años, que llegó a Murcia preñado de esperanzas, entre ellas los 30.000 millones de pesetas que, según el Gobierno regional, ganaría la Región con él. Pero si 1997 hubiera que ligarlo a un nombre propio, dentro del ámbito de la política regional, ese no puede ser otro que Domingo Valera, el ex alcalde de Mazarrón. Su protagonismo no es de los deseados, ya que responde a hechos negativos, pero es indiscutible.

Muchos preparaban ya las vacaciones, a finales de julio, cuando estalló el escándalo. Valera abandonaba el palacio de San Esteban, tras una reunión tormentosa con el presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, y anunciaba su intención de darse de baja en el PP, al tiempo que despotricaba contra el presidente de su partido y le acusaba de traicionarle y de preparar «un golpe de estado» en Mazarrón para echarle de la alcaldía.

En realidad el conflicto viene de lejos, sus raíces están en el mes de enero, cuando Valera es despedido por la empresa Hortisa, en la que trabajaba como gerente, tras detectarse un desfase de 40 millones de pesetas en las cuentas. En abril, el juzgado falla a favor de Hortisa, que ya había presentado una querrela contra el alcalde por apropiación inde-

bida, estafa y falsedad, y declara procedente su despido.

Según el explicó el PP más tarde, es a partir de entonces cuando solicita a Valera que deje la alcaldía hasta que se resuelva la querrela, y como no acepta comienza a preparar la presentación de una moción de censura. En la reunión de julio en San Esteban todo estalla en pedazos, cuando Valcárcel pide personalmente al alcalde que dimita y éste se niega. La declaración de guerra estaba firmada y Valera pasaría a la

ofensiva unos días más tarde, cuando ante un centenar de seguidores, en la calle, frente a la sede del PP de Mazarrón, declara a los periodistas que Valcárcel había asistido a varias reuniones con empresarios

en las que se había recolectado siete millones de pesetas para el partido que no aparecían recogidos en las cuentas de éste.

El bombazo produjo sus efectos. Valera, con precedentes de maledicencias y acusaciones falsas que le desacreditaban, daba fechas, nombres y detalles de la supuesta financiación irregular del PP. El partido respondió expulsándole, presentando una querrela por injurias y calumnias y concertando una moción de censura con los concejales del PSOE, IU e independientes que acabó el 8 de agosto con el mandato de Valera y con una imagen bochornosa. Los seguidores del ex alcalde retuvieron en el ayuntamiento a los concejales durante varias horas y obligaron a intervenir a la Guardia Civil para proteger su salida en coches policiales.

El PSOE, animado por el propio

Valcárcel que había manifestado su disposición a que se investigaran los hechos, presentó en la Asamblea Regional una solicitud de creación de una comisión de investigación. El PP prefirió al final echar tierra al asunto y rechazó la constitución de esta comisión.

La credibilidad de Valera quedó por los suelos cuando en septiembre difunde unas supuestas pruebas de la presunta financiación irregular del PP, entre ellas una nota manuscrita de Valcárcel, que el partido desmonta con facilidad al demostrar que se trata de un montaje y una manipulación.

Los juzgados de Totana y Murcia, que admitieron a trámite las querrelas del PP y la demanda de defensa del honor presentada por la Comunidad Autónoma contra Valera, serán los que determinen cuánto hay de verdad en este asunto. El PP intentó contrarrestar a finales de agosto la mala publicidad del caso Valera con la presentación de una denuncia por parte del alcalde popular de Villanueva contra su antecesor socialista, por un supuesto delito de prevaricación al considerar que ha-

bía favorecido a su padre en la realización de una obra. La denuncia quedó en nada.

En el plano institucional la noticia de 1997 fue la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía por unanimidad en la Asamblea. Posteriormente, el Congreso de los Diputados dio el visto bueno para su tramitación parlamentaria. No obstante, PSOE y PP se proponen limitar el alcance de las reformas para uniformar el Estatuto murciano con las demás comunidades de vía lenta. La reforma representa la mayoría de edad de la autonomía murciana, ya que permitirá asumir las competencias de sanidad, ampliar el periodo de sesiones y el número de diputados, facultar al presidente de la Comunidad a disolver anticipadamente la Asamblea y autorizar la asignación de un sueldo a los parlamentarios.

José María Aznar realizó la primera visita oficial de un presidente del Gobierno a la Región los días 18 y 19 de julio. Durante su estancia visitó una empresa hortofrutícola de Balsapintada, cenó con 1.500 militantes del PP, almorzó con un selecto grupo de personalidades de la Región, se reunió con el Consejo de Gobierno y recorrió las instalaciones de General Electric.

El año fue testigo de la pacificación y la unidad del PSOE, cuyo décimo congreso reeligió a María Antonia Martínez como secretaria general. Este partido se apuntó otro hito cuando el diputado socialista por Murcia Juan Manuel Eguigaray fue nombrado portavoz en el Congreso. IU de Murcia salió indemne de la crisis desatada por la expulsión de Nueva Izquierda. Sólo perdió tres concejales y diez militantes.

El Gobierno espera ganar 30.000 millones con la nueva financiación autonómica

PP y PSOE se proponen limitar la reforma del Estatuto de Autonomía

Collado, inocente

J. M. A. • MURCIA

El ex presidente de la Comunidad Autónoma Carlos Collado, en una gesta propia del héroe campeador, venció después de ser defenestrado. El Tribunal de Cuentas le absolvió, a él y a los ocho concejales que componían su gabinete en 1989, de un presunto delito contable en la compra de la finca Casa Grande para la instalación del complejo industrial de General Electric. El caso Casa Grande, que provocó la dimisión de Collado en mayo de 1993, forzada por el grupo parlamentario de su propio partido, el PSOE, quedó al final en nada tras el fallo del Tribunal de Cuentas.

La Comunidad Autónoma, personada como acusación en el juicio contable, y el Ministerio Fiscal, con-

sideraban que se había producido un perjuicio para las arcas regionales de 1.564 millones de pesetas en la compra de los terrenos, pero el tribunal no apreció ni malversación de fondos ni pago de comisiones.

Collado vivió con satisfacción su triunfo el 13 de febrero, cuando conoció la sentencia, lo que aprovechó para arremeter contra los ex compañeros de partido que le habían sacrificado: «Quiénes forzaron mi dimisión desde el PSOE están totalmente deslegitimados», dijo. En el partido socialista no se dieron por aludidos y desviaron las culpas hacia el PP, al que acusaron de haber llegado al poder «con excesos y engaños», merced a la campaña de descrédito que realizó a cuenta del caso Casa Grande.